



República de Colombia
Juzgado Laboral Municipal
Pequeñas Causas
Armenia

Referencia	Acción de Tutela
Accionante:	Yuri Samira Franco Aguilera
Accionado:	Municipio de Armenia – Secretaria de Transito y Transporte S.E.T.T.A
Radicación:	63-001-41-05-001-2023-10041-00
Tema	Derecho Fundamental de Petición.

Armenia, cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE TUTELA.

Decide el despacho en primera instancia la acción de tutela promovida por **Yuri Samira Franco Aguilera**, en contra **Municipio de Armenia – Secretaria de Tránsito y Transporte S.E.T.T.A**, tramite al que fue vinculado **Bancolombia S.A**

I. ANTECEDENTES

Yuri Samira Franco Aguilera actuando en nombre propio promovió acción constitucional con el propósito que se ampare su derecho fundamental de «*petición*», el cual presuntamente fue transgredido por la parte accionada.

Para motivar la acción señaló que el 30 de noviembre del año 2022, presentó una petición, **Secretaria de Tránsito y Transporte S.E.T.T.A** para que se sirvieran levantar el embargo del que fue objeto en su cuenta de ahorros Bancolombia; lo anterior por cuenta que solicitó un crédito y éste le fue negado porque la mentada cuenta se encuentra bajo la medida cautelar por parte de la autoridad accionada producto de un comparendo.

Por su parte, la **Secretaria de Tránsito y Transporte S.E.T.T.A**, en respuesta a la acción constitucional manifestó que mediante oficio EST-PT, SD-013245 se resolvió de fondo la solicitud de la accionante, y se le informó que mediante oficio ST-PTM-SD-013240 del 6 de diciembre de 2022, se requirió a Bancolombia S.A, para que aplicara el desembargo a la cuenta de ahorros de la accionante.

Para resolver basten las siguientes,

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Aspectos generales de la acción de tutela

Al tenor del **artículo 86 de la C.P**, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario de defensa judicial de derechos fundamentales cuando quiera que éstos estén vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o privada en los casos previstos en la ley; además y de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991, para efectos de determinar la procedencia de la acción de tutela debe acreditarse los requisitos de legitimación en la causa (activa y pasiva); la inmediatez; y la subsidiariedad.

En lo referente a la **legitimación en la causa por activa**, el artículo 86 de la constitución política en concordancia con el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, ésta se configura: i) a partir del ejercicio directo de la acción ii) de la representación legal, -como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas-, iii) a través de apoderado judicial -caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el

poder general respectivo-; iv) o por medio de agente oficioso. No obstante, esta última figura no procede directamente, pues es necesario que el agente oficioso afirme que actúa como tal y además demuestre que el agenciado no se encuentra posibilitado para promover su propia defensa. **(CC T-054 de 2014).**

Respecto de la **legitimación por pasiva**, de la lectura de los artículos 5, 13 y 42 del decreto 2591 se establece que la acción de tutela se puede promover contra toda acción u omisión de las autoridades, y de los particulares, en este último caso siempre que estén encargados de la prestación de un servicio público, o, respecto de quienes el solicitante se halle en situación de subordinación e indefensión.

En lo que comporta a la **inmediatez**, la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; en ese orden si bien la acción de tutela se puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe darse en un tiempo razonable, oportuno y justo. Sin embargo, la Corte Constitucional ha indicado que el requisito no es exigible de forma estricta cuando se demuestra que la vulneración cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos continúa y es actual. **(CC T-194 de 2021)**

Finalmente y en lo que atañe a la **subsidiariedad** el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, por lo que solo procede cuando quiera que el afectado no tenga otro medio de defensa judicial; también cuando existiendo el mecanismo i) se ejerza la acción como un

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) éste resulte ineficaz, caso en el que la tutela se convierte en un mecanismo de protección definitivo **(CC T-177 de 2013)**.

La valoración del perjuicio irremediable implica la concurrencia de varios elementos esenciales a saber, i) que sea cierto, es decir que existan fundamentos empíricos acerca de su probable ocurrencia, ii) debe ser inminente, esto es que esté próximo a suceder, y iii) que su prevención o mitigación sea urgente para evitar la consumación de un daño. **(CC-T 554 de 2019)**

Finalmente, respecto del requisito de subsidiariedad, para los asuntos como el aquí debatido, es preciso anotar que, el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo. **(CC T-230 de 2020.)**

2. Derecho de petición.

El artículo 23 de la Constitución Política consagra como uno de los derechos fundamentales el de petición, según el cual, toda persona tiene la facultad de acudir ante las autoridades competentes para reclamar la resolución de fondo de una solicitud, dentro de los términos previstos en la Ley.

Ahora, por virtud del artículo 13 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 *-regulatoria del derecho de petición-* toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. La norma agrega que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que

sea necesario invocarlo; además señala que a través de ese mecanismo se puede solicitar *«el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos»*

El artículo 14 *ibidem*, señala los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones así: i) por regla general toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, de incumplirse este plazo comporta una sanción disciplinaria para quien debe atender la solicitud ii) las peticiones de documentos e información deberán resolverse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción; si no se ofrece una respuesta en ese lapso, se entiende que la solicitud ha sido aceptada, por lo que la Administración no puede negarse a entregar los documentos al peticionario, por lo que las copias deben entregarse dentro de los tres (3) días siguientes. La norma incluso admite la posibilidad de que no sea posible resolver la petición en los plazos referidos, pero para ello *«autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto»*

En este orden de ideas, el derecho fundamental de petición comprende los siguientes elementos: a) La posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) La respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico;

c) La contestación material, que supone que la autoridad sobre la base de su competencia, se refiera de manera completa a los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), sin que puedan comprenderse evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo, pues la notificación forma parte del núcleo esencial del derecho de petición, al punto que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido **(CC T-147 de 2006 & T-077 de 2018)**.

Finalmente, el alto tribunal constitucional ha señalado que una respuesta clara y congruente respecto de lo pedido, sin importar si la misma es o no favorable al solicitante, excluye la posibilidad de que derecho de petición se entienda vulnerado **(C.C. Sentencia T-902 de 2014)**.

3. Caso Concreto

A partir de todo lo anteriormente expuesto, encuentra el despacho que **Yuri Samira Franco Aguilera**, se encuentra legitimado por activa para invocar la protección de sus derechos, por ser la titular de la petición de la que solicita información y actuar en nombre propio.

En el mismo sentido el **Secretaria de Tránsito y Transporte S.E.T.T.A** está legitimada por pasiva para atender los pedimentos del actor pues es una entidad de derecho público, de la cual se denuncia ha conculcado los derechos fundamentales de la accionante por acción u omisión.

Se arriba a una idéntica conclusión en cuanto a la inmediatez, pues la petición que se denuncia ha sido echada de menos por la actora fue elevada el día 30 de noviembre de 2022, y si bien

la tutela se impetró luego de más de 9 meses por lo que se podría inferir que no se obró en un término razonable, lo cierto es que presunto atentado al derecho fundamental de petición se posterga en el tiempo mientras éste no se resuelva de fondo, de allí que se tiene por satisfecho este requisito.

Vistas, así las cosas, constata el despacho que el 22 de noviembre de 2022, la actora presentó un derecho de petición ante la **Secretaria de Tránsito y Transporte S.E.T.T.A de Tránsito y Transporte S.E.T.T.A**, en la que solicitó el «levantamiento de la medida cautelar de embargo» que recae sobre su cuenta de ahorros en el banco Bancolombia S.A.

Sin embargo, denota el despacho que a pesar que entidad accionada dio respuesta oportuna al requerimiento e incluso accedió a lo solicitado por la actora pues remitió el oficio de desembargo a Bancolombia (fs 5 y 6 archivo 009 ED), lo cierto es que no existe evidencia de que la petición se haya notificado a la dirección informada por la actora oportunamente, y fue solo gracias al trámite de esta acción constitucional que se procedió a remitir la respuesta al correo electrónico informado por la actora samuji@live.com (f.7 archivo 009 ED)

Por lo anterior, este juzgador considera que si bien a la actora se le vulneró el derecho de petición, dado que no se le puso en conocimiento oportunamente la respuesta a su requerimiento, a pesar que fue clara, precisa, congruente e incluso favorable a sus intereses, de todas formas y gracias a la intervencion del juez es claro que la afectacion a sus derechos ha cesado, razon por la cual se declarará improcedente la accion de tutela por haberse confgurado una carencia actual de objeto por hecho superado.

Finalmente y aun cuando se vinculó al trámite de tutela a Bancolombia S.A, no se predica acción u omisión de la vinculada frente al presunto atentado a los derechos fundamentales de la accionante, y ello es así porque no existe ninguna petición elevada a la sociedad de derecho privado; a ello debe agregarse que la acción de tutela no es el mecanismo para discutir derechos de raigambre económico, y entre ellos disponer o ordenar el levantamiento de medidas cautelares.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Laboral Municipal de Pequeñas Causas de Armenia**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR, por improcedente la acción de tutela formulada por **Yuri Samira Franco Aguilera**, en contra **Municipio de Armenia – Secretaria de Tránsito y Transporte S.E.T.T.A**, trámite al que fue vinculado **Bancolombia S.A**, por haberse configurado una carencia actual de objeto por hecho superado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase,

MANUEL ALEJANDRO BASTIDAS PATIÑO
JUEZ



Puede escanear este
código QR para acceder
al Micrositio del
Juzgado o dirigirse al
siguiente enlace
<https://t.ly/P-59>